

## NOTAS DE PRENSA ANEC DICIEMBRE 2012

### La transición

#### **Secretarios del área social no tienen el perfil, pero "no pueden ser peores" que los panistas: ONG**

Ariane Díaz, Carolina Gómez y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 1º de diciembre de 2012, p. 4

La designación de los nuevos titulares de las secretarías de Desarrollo Social (Sedeso), Educación Pública (SEP), Agricultura (Sagarpa), Reforma Agraria (SRA) y Medio Ambiente (Semarnat) generó dudas a integrantes de organizaciones civiles, agrarias y ambientales y en investigadores por no contar con perfiles ligados a las carteras asignadas, por lo que su elección evidencia que prevalecieron los "criterios políticos", y en el caso de Rosario Robles, quien quedó al frente de la Sedeso, señalaron que se revivió una estrategia salinista.

Hilda Salazar, de la Red de Género y Medio Ambiente, consideró que la designación de Robles representa "una redición de la política social salinista de coptar a personajes de la izquierda 'arrepentida' para legitimar una supuesta apertura en materia social. En realidad ella vendrá a legitimar más de lo mismo".

Valeria Escorzo, de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Cultura, cuestionada sobre el peso de las acusaciones de corrupción que en su momento recayeron sobre la ex perredista ahora que tendrá a su cargo el manejo de programas sociales, comentó que sin importar el color ni el partido debe haber vigilancia y transparencia en el uso de los recursos.

Aparte, Lucía Rivera y Tatiana Coll, investigadoras de la Universidad Pedagógica Nacional, señalaron que la elección de Emilio Chuayffet Chemor como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) representa el arribo de un "priísta de vieja cepa y de un personaje totalmente ajeno a los procesos educativos".

Coincidieron en que su designación "no es una señal alentadora". Pareciera, explicó Rivera, que "no imperan criterios serios y racionales, sino eminentemente políticos en el proceso para elegir a quien encabezará la política educativa en el país".

Oganizaciones campesinas consideraron que los nombramientos hechos por Enrique Peña Nieto para la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez, y para la SRA, Jorge Carlos Ramírez Marín, aunque no tienen perfil ligado al campo "no pueden ser peores" que los funcionarios designados en las dos administraciones panistas para el sector.

Víctor Suárez, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), consideró que "son políticos

tradicionales que no conocen el campo y que tienen el enfoque del PRI de antaño: una visión clientelar y corporativa".

Raúl Pérez Bedolla, secretario de organización de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), precisó que "pese a que no tienen un perfil como el que esperábamos, al menos no son empresarios como los que pusieron durante 12 años al frente de la Sagarpa. A Javier Usabiaga, a quien lo tuvimos que abrir a presiones; Alberto Cárdenas, quien atendía pero no oía y a Francisco Mayorga, que ni oye ni escucha ni lo ves. A todos les fallaba el trato político que parece que es lo que ahora se busca".

Miembros de organizaciones ecologistas consideraron que se debe dar "el beneficio de la duda" al recién nombrado secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, si bien reconocieron que "preocupa" que su perfil no sea el de un experto en la materia.

Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló que como miembro del equipo de transición, Guerra Abud mostró apertura y dijo confiar en que la mantendrá, y Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, refirió que "hemos planteado que las personas que estén al frente tengan un amplio conocimiento y compromiso con problemas del medio ambiente"

<http://www.jornada.unam.mx/2012/12/01/politica/004n2pol>

**Forzoso, crear políticas para abatir la dependencia alimentaria**  
**Anec: fracasará cruzada contra el hambre si Peña no efectúa cambios**  
**Susana González G.**  
**Periódico La Jornada**  
**Lunes 3 de diciembre de 2012, p. 25**

Con el llamado a todos los sectores, incluidos medios de comunicación, agrupaciones religiosas y "todo mexicano que quiera aportar tiempo y recursos", la cruzada nacional contra el hambre, anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto, corre el riesgo de ser una "campaña mediática y cortoplacista al estilo Teletón, con efectos superficiales", si no se impulsan cambios de Estado para reducir la dependencia alimentaria del país, advirtió Víctor Suárez Carrera, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores de Campo (Anec).

"No debe tener el carácter asistencialista, filantrópico y cortoplacista que ha caracterizado la política social y los programas gubernamentales discrecionales de los últimos años, a los que está acostumbrado el PRI para ampliar sus redes corporativas. Cualquier acción para erradicar el hambre y la malnutrición en México debe estar basada en primer lugar en la obligación constitucional del Estado mexicano de garantizar la plena realización del derecho a la alimentación", indicó en entrevista.

México, aseguró, tiene actualmente una dependencia agroalimentaria de 40 por ciento, porque no produce los alimentos suficientes que requiere la población. Desde 1982, con el gobierno priísta de Miguel de la Madrid, comenzó el desmantelamiento del campo mexicano y el incremento de las importaciones.

La producción de maíz, grano básico de los mexicanos, es de 22 millones de toneladas al año, pero el consumo es de 32 millones, o sea, hay una dependencia de 31 por ciento, ejemplificó. "En soya tenemos 95 por ciento de dependencia, en arroz 85, en trigo 70, en sorgo 40, en leche 25 y en huevo dejamos de ser autosuficientes con la gripe aviar."

Así, para romper esa tendencia y abatir la pobreza alimentaria que padecen 19 millones y medio de mexicanos, según cifras oficiales, se requiere que en dicha cruzada, que forma parte de los 13 compromisos que asumió en su primer día como presidente, Peña Nieto rompa la alianza establecida por el gobierno federal con empresas monopólicas trasnacionales que dominan toda la cadena agroalimentaria. Pero puso en duda que suceda, "porque la forma en que llega Peña a la Presidencia lo ata a esos intereses. El problema es su vinculación y subordinación a la agenda corporativa trasnacional".

En la producción agropecuaria, planteó, debe haber un cambio a una política de autosuficiencia, con prioridad en el fomento productivo de las pequeñas y medianas unidades de producción.

<http://www.jornada.unam.mx/2012/12/03/economia/025n1eco>

### **El caso de los invernaderos, otro fracaso en el campo tlaxcalteca Pedro Morales**

Jueves 06 Diciembre 2012 - 09 : 36

La "Huerta de Europa", así llamaba a la extensión de invernaderos en Almería.

Todo empezó durante la administración panista de Héctor Ortiz, con ese viaje a España del ex secretario de desarrollo económico, Humberto Alba Lagunas a Almería, España, de ahí trajo y vendió la idea de que la producción en clima controlado era la panacea para los productores agrícolas de Tlaxcala.

La "Huerta de Europa", así llamaba a la extensión de invernaderos que brilla en el litoral de Almería.

Pero no tomó en cuenta que su brillo se está apagando.

Los problemas se acumulan y la herencia contaminada está saliendo a flote.

En los años 50, los antiguos alpujarreños almerienses por fin aprendieron el modo de arrancarle a la reseca estepa del poniente tres cosechas al año.

Con estacas y plásticos armaron cuatro invernaderos, que hoy se cuentan por miles. La tierra se cubrió con arena sustraída de las playas, única forma posible de aprovechar las salobres aguas de los acuíferos, manantiales subterráneos de los que bebe la provincia.

El clima, el sol y el viento amables del sur, hicieron el resto.

Hoy la huerta de Europa crece bajo un laberinto de plásticos y Almería ha dejado de ser la tierra mísera que fuera antes de los invernaderos, una árida estepa mediterránea de arbustos bajo cuyo paraguas de sombra se refugiaba la vida.

Casi nada queda de la estepa ni de los invernaderos, del endémico parral sólo se adivina la silueta en la estructura de los invernaderos más viejos.

Un verdadero milagro económico, sin duda, pero con un costo medioambiental impagable.

El mar de plástico se ha bebido los acuíferos y devorado las playas para alimentar el suelo de sus invernaderos; ha ocupado ramblas y cauces; ha subido por los montes a más de 400 metros de altura y enterrado toneladas de plásticos y residuos orgánicos, que siguen supurando pesticidas y abonos bajo la tierra.

Tampoco se tomó en cuenta que en Almería hay unos 16 mil agricultores que se miran de reojo porque el primero que mete la cosecha en el mercado se lleva la mejor tajada.

La mitad están asociados a una cooperativa o sociedad agraria de transformación; la otra mitad va por libre y mueve sus cosechas a través de las alhóndigas, donde se subasta el producto y se compra, por lo general, a la baja.

Así llegó la era de los invernaderos a Tlaxcala, un detalle llamaba la atención, casi al final de la administración del perredista Alfonso Sánchez Anaya, también le entraron a la moda de los invernaderos.

En ese entonces la producción estaba enfocada a los crisantemos, al principio fue un mediano éxito, pero al cierre del sexenio ya las instalaciones lucían abandonadas, el mercado se había desplomado.

“Hay que reactivarlos”, fue la sugerencia del gabinete orticista en donde el Sepuede, Sagarpa y Fomtlax tuvieron la sartén por el mango, los créditos fluyeron al por mayor, sobre todo en tiempo de funcionaria de Rosalía Peredo Aguilar.

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tlaxcala (Cesavetlax) anunció la puesta en marcha del programa de inocuidad de alimentos para productores de jitomate a través de invernadero, mediante el cual busca garantizar la exportación de este producto.

El presidente del comité, Guadalupe Sánchez Minor, manifestó que el objetivo de este programa es que a los productores del estado que están a un paso de exportar no les sea rechazada la producción por falta de sanidad, y ofrezcan la calidad exigida por autoridades internacionales.

Estimó que en el estado se encuentran registrados aproximadamente mil unidades de producción, de las cuales sólo 18 propietarios de invernaderos se habrían interesado en cumplir con la norma de sanidad que expide la Secretaría de Salud (Sesa) a autoridades agropecuarias.

"Los productores que tienen el interés de exportar ya se han acercado para recibir la información necesaria. Se tiene en proceso a 18 invernaderos que están en trámite para recibir la certificación de inocuidad de alimentos, y en caso de que reciban el certificado, la producción que obtengan será garantía de exportación y no van a tener problema de sanidad e higiene del producto".

Es un programa muy estricto, porque se verifica el estado de salud de los trabajadores.

Que no tengan Hepatitis, que no tengan caries, que no tengan hongos, que las uñas estén perfectamente bien cortadas, que no tengan tierra y que estén bien aseados. Además se realiza una auditoría para verificar que las instalaciones se encuentran en buenas condiciones y exista una organización en los procesos".

El presidente del comité señaló que el Cesavetlax se ha enfocado a la certificación de invernaderos de los proyectos que impulsa el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax), pues aseguró que la intención de los productores es exportar a Estados Unidos y Canadá.

La empresa ha producido jitomate bola, jitomate Saladette, jitomate Cherry, chile poblano y chile jalapeño.

Inició operaciones el 30 de septiembre de 2002 y ha sido beneficiada con los programas de la Sagarpa y fue financiada por Firco.

"Actualmente cuenta con dos hectáreas de invernaderos tecnificados y germinador en tres hectáreas de terrenos propios, con oficinas, sala de juntas, área de selección, bodega de producto terminado, almacén de herramientas, almacén de materiales, aula de capacitación, habitaciones para empleados, cuarto de vigilancia y atención médica".

La responsable del programa de inocuidad en la empresa "Rojo Tlaxcala" dijo que para que un productor tenga la capacidad de exportar y garantizar el producto en mercados internacionales, es necesario que se cumpla con una serie de normas y organizaciones físicas de la empresa.

La empresa Rojo Tlaxcala fue la primera en ingresar a mercados internacionales en 2007, exportó 150 toneladas a Estados Unidos y Canadá, y además fue la primera empresa en haber sido certificada en inocuidad en Almería, España.

"En la actualidad se encuentra en proceso de capacitación para obtener la Certificación ISO 9000 en sus procesos de producción, administración y servicios", concluyó.

Se dijo que en breve la empresa estará en posibilidades de anunciarse como la primera empresa exportadora de jitomate certificada, misma que tendrá la posibilidad de incrementar su exportación a más de 150 toneladas.

Después del proceso de certificación en el que se encuentra la empresa Rojo Tlaxcala, autoridades de la Sagarpa y del Cesavetlax confían en que el resto de productores de invernadero se acerquen a las dependencias para recibir asesoría e información, pues aseguraron que la certificación de inocuidad les garantizará que su producto cuente con la calidad de exportación requerida a nivel internacional.

Los frutos que Antonio Espejel Hernández esperaba no se dieron: hoy tiene una deuda de 320 mil pesos y un invernadero con tomates plagados.

Este pequeño agricultor tlaxcalteca decidió entrar al Programa de Desarrollo Rural Municipalizado de Alianza para el Campo de Sagarpa, buscando sobrevivir a la ruina de la agricultura de temporal, que tiene en vilo a campesinos.

La empresa que contrató, obligado por las instancias de gobierno, para la construcción, asesoría y comercialización, desapareció apenas levantó unas carpas plastificadas maltrechas con materiales de baja calidad.

En junio de 2007, firmó los documentos requeridos por el gobierno municipal de Tlaxco, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Había organizado a 15 ejidatarios y aparceros de su comunidad para iniciarse en el negocio especializado de la producción de jitomate en invernaderos.

El proyecto sería posible gracias a la mezcla de recursos gubernamentales y al préstamo de Banorte: 30% recursos públicos, 70% deuda bancaria.

El banco solicitó una garantía en efectivo y una prendaria: el gobierno federal aportó 90 mil pesos de garantía líquida. Antonio hipotecó su casa, el costo total del invernadero fue de 320 mil pesos.

Pero había una condición por parte de las instancias públicas y del banco: no obstante que los productores tenían mejores cotizaciones, la empresa Invermaleno, propiedad de José Salvador Maleno Ruiz, debía ser contratada para el proyecto.

La noche en que Antonio Espejel Hernández firmó el contrato de compra-venta y asesoría técnica en su casa, frente a Luis Humberto Hernández González, entonces encargado de desarrollo rural de la presidencia municipal de Tlaxco, no entendió muchas cláusulas, según cuenta en la demanda por fraude que presentó ante las autoridades judiciales de Tlaxcala un año más tarde.

“Luis Humberto Hernández González acudió a nuestro domicilio para llevar el contrato de compra-venta y asesoría técnica, el cual permitió que leyera mi hijo, le dijo que no entendía todas las cláusulas, que si le explicaba; respondió que no tenía tiempo, que todavía faltaba la firma del presidente municipal, pero que todo estaba en regla”.

Según María de la Luz Cano Flores, abogada de los 13 agricultores que presentaron denuncia penal, hace meses que esta empresa cerró sus oficinas en Tlaxcala; además, su domicilio para efectos legales siempre estuvo en Zacatecas. En ambos casos, los números telefónicos que proporcionó Invermaleno son de celulares y están fuera de servicio.

“Dentro de mi particular punto de vista, este empresario ya se peló”, dice la abogada defensora.

#### LA OTRA PLAGA

El condicionamiento de subsidios es ilegal, pero la realidad impuesta por el sistema de justicia y fiscalización en Tlaxcala ha rebasado las leyes.

“En las instancias locales de las dependencias públicas es frecuente el condicionamiento de los apoyos al pago de gratificaciones a funcionarios o para que las inversiones se hagan con algún proveedor o constructora, o que la comercialización se haga con tal o cual comercializadora”, dice Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec).

El crecimiento del minifundio ha agravado la falta de créditos para pequeños productores: 72% de las unidades de producción tienen menos de 5 hectáreas, los bancos no quieren arriesgar su dinero, los programas gubernamentales permiten la mezcla de recursos públicos, créditos de la banca comercial y de desarrollo, pero no hay dinero que alcance si la plaga de la corrupción infesta las políticas agropecuarias.

A raíz de la denuncia presentada el 1 de diciembre de 2008, la Procuraduría de Justicia del Estado de Tlaxcala realizó un peritaje al invernadero de Antonio ubicado en la comunidad de Atotonilco, municipio de Tlaxco, encontró una nueva sorpresa: los peritos estimaron su valor máximo en 150 mil pesos, los materiales eran de mala calidad, la construcción resultó un fiasco.

El agricultor había pagado 170 mil pesos de más, su invernadero no producía y su casa, hipotecada.

“Nos obligaron, en lugar de haber cedido debí denunciarlos. Caímos en su juego por la ambición de tener un invernadero”, cuenta Antonio en medio de matas plagadas.

“No sé si me vayan a embargar mi casa. No quiero quedar a deber, pero no hay de donde pagar”.

Según la Auditoría Superior de la Federación, Sagarpa no evalúa el impacto de sus programas en la calidad de vida de los productores o en el combate a la pobreza.

Además, varios de sus programas de desarrollo rural han sido señalados por incumplir con la comprobación de recursos asignados, por beneficiar a grandes productores sobre los más necesitados o por dar recursos a personajes relacionados con el crimen organizado.

“Al campo se le ha visto como botín político, principalmente por los partidos que han estado en el poder federal”. El campo empobrecido, desorganizado es más proclive al control a través de apoyo, individualizados y pequeñas prebendas”, refiere Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec).

## LA SEGUNDA ESTOCADA

Antonio Espejel Hernándezacudió desesperado a las oficinas de Sagarpa, institución federal responsable de coordinar la Alianza Municipal junto a los gobiernos estatales y municipales.

La situación era clara: la empresa sugerida por las autoridades cobró más del doble del valor real del invernadero, incumplió compromisos de capacitación y comercialización del jitomate y dejó a productores inexpertos a la deriva en un negocio muy especializado.

La Sagarpa accedió a dar 118 mil pesos para la reconstrucción del invernadero a través del Programa de Adquisición de Activos Productivos, pero el apoyo para sanear los daños ocasionados tenía una nueva condición. “El delegado de Sagarpa nos impuso una constructora a su gusto: ‘les voy a dar el dinero, pero tienen que contratar a la constructora que yo digo’”.

La nueva constructora tampoco hizo el trabajo de forma adecuada: “Se desapareció y quedamos igual”. La lluvia no se detiene, Atotonilco está encallado en una región forestal que ha resentido el cambio del clima.

La agricultura de cebada y maíz fue el sustento de cientos de familias durante muchos años; los productores buscan alternativas para hacer producir sus tierras, los tres órdenes de gobierno han implementado programas de invernadero para adaptar la agricultura a las nuevas condiciones del tiempo, pero la corrupción, la manipulación y la negligencia son devastadoras frente a la ignorancia y falta de capacidad técnica de los campesinos.



“Les lavaron la cabeza diciendo que obtendrían 3 o 4 cosechas al año. Este año hubo poca cosecha y ya les llegó el cobro”, dice Saturnino Orozco Flores, investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Los invernaderos son un medio de producción especializado, requieren gran capacidad técnica, asesoría; si se plagan pierden toda la cosecha, afirma Saturnino Orozco.

“Los grandes invernaderos promovidos por las instancias de gobierno son inversiones ciegas, dan los recursos sin saber a dónde van dirigidos. Lo peor es que son concesiones a empresas privadas y los campesinos no tienen a quién reclamar.

En Tlaxco fueron unos españoles, no les dieron asistencia técnica, construyeron mal y abandonaron a los productores”, afirma.

En medio del invernadero de una hectárea, sembrado con plantas marchitas, bajo la presión de sus deudas, Antonio Espejel anuncia que cortará todas las matas de jitomate y sembrará otra vez, aunque las cosechas apenas dan para pagar gastos corrientes.

No tiene opción: su parcela de temporal es una moneda al aire, las lluvias y las sequías han arrasado las cosechas. En México, 78% de las unidades de producción han sufrido pérdidas por el clima, según el censo agropecuario del 2007.

“Voy a invertir más. Nos entregaron unos calentadores para el frío, esos calentadores consumen de 500 a 600 pesos diarios de diesel y luz. Eso gasto a diario; si no tenemos precio nos vamos a la ruina”.

Su expectativa de precios fue demasiado optimista para las condiciones del mercado: 5 pesos el kilogramo de jitomate, pero en su última cosecha vendió el kilo en tres pesos, en agosto de 2010. “El año pasado perdí como 15 mil pesos”, dice Juan. La producción anual estimada en el proyecto era de 280 mil pesos el primer año.

Las quejas sobre el desempeño de las instituciones de desarrollo rural sobran: los subsidios llegan tarde —febrero llegaba hasta octubre—, imponen la compra de ciertas marcas de fertilizantes, condicionan la entrega de recursos a la contratación de empresas de servicios... “La burocracia es la que nos acaba”, dice Eduardo, comisario ejidal de Atotonilco, comunidad de Tlaxco.

[http://www.e-tlaxcala.mx/2012/index.php?option=com\\_zoo&view=item&layout=item&item\\_id=5483](http://www.e-tlaxcala.mx/2012/index.php?option=com_zoo&view=item&layout=item&item_id=5483)

**Crisis y perspectivas del campo mexicano, en el nuevo escenario - Víctor Suarez**

Read more: <http://senderodefecal1.blogspot.com/2012/12/crisis-y-perspectivas-del-campo.html#ixzz2ElMhoN3W>

## **Campeños exigen a Peña Nieto eliminar el IETU**

El nuevo gobierno federal debe trabajar en una reorientación de recursos y revisar programas como Procampo, Oportunidades y el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), que no están dando los resultados esperados, dado que prevalece la baja productividad, la pobreza y marginación social. Y además piden productores que se elimine el IETU que campesinos que reciben apoyos rurales, en un 6 por ciento en el país, pagan como si fueran empresarios y no lo son

Durante el foro, organizado por el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc), la directora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), Isabel Cruz Hernández, dijo que productores piden que se elimine el IETU que campesinos que reciben apoyos rurales, en un 6 por ciento en el país, pagan como si fueran empresarios y no lo son.

También se expuso que nuevo Gobierno Federal debe trabajar en una reorientación de recursos y revisar programas como Procampo, Oportunidades y el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), que no están dando los resultados esperados.

Isabel Cruz Hernández, destacó que en el medio rural mexicano 20 años de transferencias condicionadas no han contribuido a erradicar la pobreza en el campo. Porque no impactan activos productivos y generación de empleo, y se ha dado la paradoja de que “a mayor monto presupuestal, mayor desigualdad en el campo”.

## **PIDEN PRODUCTORES DEJAR DE PAGAR IETU**

Además, solicitaron una revisión del régimen fiscal para las pequeñas y medianas empresas rurales, donde destaca la eliminación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

Durante el foro Presupuesto y políticas públicas para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, realizado en la Cámara de Diputados, recalcaron que los recursos del Programa Especial Concurrente (PEC) rural y los programas para el agro, se siguen concentrando en los estados del norte, donde en materia de productividad ya alcanzaron un tope, mientras que en el sureste, donde existen pequeños y mediados productores con potencial, los dineros son limitados.

“Debemos buscar un enfoque productivo de combate a la pobreza y no simples transferencias como Oportunidades o Procampo, que no tiene ningún objetivo productivo ni ninguna vinculación con el aumento de producción de alimentos”, expresó.

Consideró que si no se vincula la política productiva con Procampo, Oportunidades y el PESA, no vamos a poder cambiar estructuralmente ninguna tendencia de pobreza y desigualdad.

El diputado Silvano Aureoles Conejo, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, planteó que ahora se habla de un “presupuesto inercial”, es decir que se mantenga en condiciones similares al año pasado, por lo que se comprometió a pugnar

porque sea “el que corresponda”, y a impulsar la revisión de asignaciones a los diferentes rubros y de reglas de operación, que limitan la operación de los programas.

Estuvo de acuerdo en la necesidad de revisar los programas para el medio rural a la luz de los resultados que están dando.

Cabe recordar que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) propuso un presupuesto para el PEC rural 2013, de 332 mil 197 millones de pesos (mdp), que representan 8.6 por ciento más respecto al de 2012.

## ELIMINAR IETU

Víctor Suárez Carrera, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), hizo una serie de propuestas a los legisladores donde destaca, en materia fiscal, eliminar el IETU y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE). También propuso la eliminación del requisito del artículo 32-D para hacer posible el régimen simplificado de tributación para los pequeños y medianos productores y empresarios agropecuarios y pesqueros.

Respecto al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) planteó el establecimiento de un impuesto del 20 por ciento a refrescos y otras bebidas con fructosa, cuyos recursos recaudados se destinen a dotar de agua potable a comunidades rurales e instalar bebederos en escuelas públicas.

Suárez Carrera también se pronunció por disminuir los precios de la gasolina, el diesel y la electricidad para reactivar y dar rentabilidad a las actividades agropecuarias.

El legislador perredista, Juan Antonio Mendívil, indicó que el PEC rural consideró 305 mil millones de pesos para este año, pero 70 por ciento se canalizó a estados del norte del país y para el sur fue menor. Sin embargo, matizó, no se trata de quitar a unos para dar a otros, sino de analizar cómo impacta la política pública para generar desarrollo rural del campo mexicano.

<http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=357842>

### **"Hay un uso clientelar y corporativo del presupuesto del sector"**

#### **Insuficientes, los recursos planteados para el campo en 2013: especialistas**

**Angélica Enciso L.**

**Periódico La Jornada**

**Miércoles 19 de diciembre de 2012, p. 10**

Aunque se incrementa en 5 mil millones de pesos el monto para el Programa Especial Concurrente (PEC) del sector agropecuario en la iniciativa del presupuesto de egresos, esto no es relevante, porque no hay un cambio en la orientación del sector, que ha sido fallida durante la década reciente, advirtió Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (Anec).

El PEC debería llegar a los 310 mil millones de pesos, es decir, 10 mil millones más de lo que plantea el proyecto del presupuesto, consideró por su parte Raúl Pérez Bedolla, en representación de la Coordinación General del Congreso Agrario Permanente (CAP).

Víctor Suárez estimó en entrevista que la iniciativa del presupuesto debe tener como objetivo el derecho a la alimentación, que no está considerado, ni tampoco la necesidad de elevar la producción alimentaria para enfrentar crisis de precios y su volatilidad. "Se mantiene una situación inercial, que favorece la baja producción y le da la espalda al fomento productivo, con una orientación asistencialista en lugar de productiva".

Consideró que el incremento de 5 mil millones de pesos no es relevante, porque cada año se ha elevado el monto del presupuesto al campo, pero aumenta la importación de alimentos, la desigualdad, la pobreza y la migración. "Hay una política equivocada, un uso clientelar y corporativo del presupuesto rural".

Agregó que el Procampo cambia de nombre a Procampo Productivo, pero no hay modificaciones en las reglas de operación, ya que a este programa se le reduce el monto en 900 millones de pesos en 2013.

Recordó que se han hecho propuestas para la reorientación del presupuesto, las cuales tienen como centro cumplir el derecho constitucional a la alimentación, establecer un programa nacional alimentario que integre los programas dispersos en torno al objetivo de la realización plena del derecho a la alimentación.

#### Autosuficiencia alimentaria

También se ha propuesto el establecimiento de un programa estratégico para la autosuficiencia alimentaria sin transgénicos para campesinos, con capacitación y organización, con el fin de elevar la productividad de alimentos básicos con un nuevo enfoque de agricultura basada en la ecología, no en los modelos fallidos de uso intensivo de agua y energía.

En tanto, el Congreso Agrario Permanente externó su preocupación por la "actitud conformista" mostrada por los diputados de la Confederación Nacional Campesina (CNC) para defender un mayor presupuesto para el agro en la Cámara de Diputados, al expresar que "están felices por los mil millones de pesos para proyectos estratégicos" que contempla el PEC 2013, señaló Pérez Bedolla.

Destacó que del proyecto del presupuesto destinado al agro llama la atención el reagrupamiento y reforzamiento de programas estratégicos, además de que no cancela ningún programa social. Consideró necesario reforzar los programas de apoyo a la producción, como los reaseguros que trabaja la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los de Financiera Rural, los de fomento productivo

como Promaf y los programas estratégicos dirigidos a fortalecer la producción de granos básicos y oleaginosas.

<http://www.jornada.unam.mx/2012/12/19/politica/010n2pol>